



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

SENTENCIA DEFINITIVA N° 8206

**AUTOS: “TRONCOSO, CARLOS ALBERTO c/ PREVENCIÓN ART
S.A. s/RECURSO LEY 27348” (Expte. N° 30.807/2024)**

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2025.-

VISTOS:

Estos autos en los cuales **CARLOS ALBERTO TRONCOSO** interpone recurso ante la Justicia Nacional del Trabajo en los términos que surgen del escrito de inicio -incorporado al SGJ Lex-100 en fecha 02/08/2024- tendiente a cuestionar el resultado de la decisión del titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 10 de Capital Federal, que aprobó el procedimiento previamente llevado y se agravia –en lo que aquí interesa– de las conclusiones del dictamen médico, que **resolvió que el actor NO posee incapacidad como consecuencia del accidente que dice haber sufrido el 31 de agosto de 2023.**

Manifiesta el Sr. TRONCOSO laborar para la firma MASTELLONE HNOS S.A. desde el 01/07/2010, revistiendo la categoría de operario, desarrollando tareas de elaboración, pasteurización y homogeneización de lácteos. Su jornada laboral es de lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hs. con un franco rotativo y percibe por ello una remuneración de \$700.000.-

Describe que el día **31/08/2023**, siendo aproximadamente las 16:00 hs., en momentos en los que se encontraba caminando por el sector de lácteos, **tropezó al pisar una**



canaleta de desagüe y cayó al suelo apoyando todo el peso de su cuerpo sobre la mano izquierda, lo que le ocasionó un fuerte dolor.

Expone que notificó a su supervisor de lo ocurrido y tras formalizar la denuncia del incidente ante la aseguradora, fue derivado a *Servicios Hospitalarios San Justo*, donde se le proporcionó la atención médica inicial. Allí se le indicó la ingesta de diclofenac, la realización de estudios diagnósticos y reposo. Al día siguiente, se realizó una ecografía de la mano izquierda y se le diagnosticó una **tenosinovitis del extensor del dedo anular izquierdo**, por lo que se prescribió la realización de FKT, la administración de antiinflamatorios y reposo laboral.

Aduce que, a pesar de haber cumplimentado las tres sesiones de kinesiología indicadas, persistió el dolor en su mano izquierda y la demandada procedió a otorgarle el alta médica sin incapacidad el día 13/09/2023, bajo el argumento de que padecía una afección de índole inculpable, sin proporcionarle tratamiento adicional alguno, ni siquiera la terapia psicológica que había solicitado.

Estima padecer una incapacidad psicofísica del 25% de la T.O., que atribuye en un 15% por secuelas físicas y un 10% por daño psicológico más factores de ponderación.

PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. se presentó a fs. 140/167 del expediente administrativo, contestando la expresión de agravios y solicitando el rechazo del recurso de apelación intentado por entender que no cumple con los requisitos esenciales previstos en el código de forma, toda vez que carece de una crítica concreta y razonada de las partes del dictamen que el recurrente considera inadecuadas, resultando





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

formalmente inadmisibile, por lo que solicita que se confirme lo actuado en sede administrativa.

Afirma que recibió la denuncia del siniestro y que procedió a otorgar las prestaciones correspondientes hasta el alta médica por fin de tratamiento. Además, sostiene que el actor no realizó denuncia alguna respecto a la patología psicológica que aduce padecer y que ésta tampoco fue objeto de reclamo ante las Comisiones Médicas por lo que solicita su rechazo. También niega la veracidad de los dichos volcados en el recurso y argumenta a favor de la existencia de un control jurisdiccional suficiente en sede administrativa.

A fs. 247 del expediente administrativo, atento el estado de las actuaciones administrativas, la Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 10 dispuso la remisión del expediente a la Justicia Nacional del Trabajo, siendo recibida en esta dependencia con fecha 02/08/2024.

Producida la prueba pericial médica, la parte demandada alegó mediante escrito de fecha 25/08/2025, mientras que la actora no hizo uso de su derecho a presentar memoria escrita, pese a encontrarse debidamente notificada, quedando así los autos en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1º) Sentado lo expuesto, es preciso señalar que la accionada en su conteste, reconoce su calidad de aseguradora de la empleadora del accionante y que el contrato celebrado estaba vigente al momento del accidente acaecido en fecha 31/08/2023. Sin perjuicio



de ello, la demandada afirma no haber recibido denuncia alguna respecto de las afecciones psicológicas descriptas por el actor a la hora de la interposición del recurso.

Sin embargo, ello no resulta óbice para que tenga favorable tratamiento la afección en cuestión. Digo ello, porque las partes están contestes que la instancia administrativa previa y obligatoria impuesta por la Ley 27.348 está cumplida.

La norma dispone que es ante la autoridad administrativa ante quien el trabajador damnificado debe solicitar "la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias" (art. 1° Ley 27.348). Esto no implica, que el trabajador deba señalar (denunciar) con precisión cada una de las dolencias que la contingencia le haya provocado. Para más, tampoco se advierte que la Resolución SRT 298/17 (ni su modificatoria Res. SRT 899-E/2017) lo disponga. La carga con la que cuenta el trabajador damnificado, es la de denunciar la contingencia -extremo aquí cumplido- pero no así cada una de las afecciones / dolencias que posea como consecuencia de la contingencia.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia que comparto (Leusink, Leonardo vs. Provincia ART S.A. s. Recurso Ley 27348, CNTrab. Sala I; 12/02/2025; Rubinzal Online; RC J 2257/25) que "no puede pasarse por alto que la reparación pretendida por la afectación a la capacidad de trabajo, con fundamento en la ley especial, posee, en esencia, carácter alimentario y por extensión, es irrenunciable (art. 11.1 LRT)", sumado a "la República Argentina se comprometió, ante la comunidad de naciones americanas, a





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

garantizar el derecho de toda persona "a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente" (art. 8° CIDH)".

Finalmente el Máximo Tribunal, en el precedente "Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART SA s/accidente-ley especial" (Expte N.º 14604/2018/1/RH1), estableció el carácter "amplio y suficiente" del control judicial de la actuación de la Comisión Médica por los Tribunales, lo que asegura el debido proceso (art. 18 de la C.N.).

Por las consideraciones expuestas precedentemente y jurisprudencia citada, el planteo formulado en este sentido por la accionada será desestimado. Así decido.

2º) Que, como resultado de la medida para mejor proveer en su momento ordenada, la perito designada –Dra. MARIANELA GEREZ– informó que el actor presentaba, al momento de practicarse el examen, una **incapacidad física del 2% de la T.O. por **Limitación funcional del dedo anular de la mano izquierda**, al que adiciona la incidencia de los factores de ponderación en el siguiente sentido: *Dificultad para la realización de tareas habituales: Leve (10%) - No Amerita Recalificación (0%) - Edad: (45 años) (2%). Total factores de ponderación: (12% s/ 2%) = 0,24%. Arribando a una incapacidad física total del 2,24% de la T.O.***

En relación a la **esfera psíquica** del accionante informó la existencia de una **Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado I**, la cual no genera incapacidad alguna.

En definitiva, de la pericia presentada surge que la incapacidad física del actor asciende al 2,24% de la T.O.



El dictamen que antecede fue impugnado por la parte demandada a fs. 47/52 y por la parte actora a fs. 53/56 del expediente digital.

La experta contestó las observaciones efectuadas por la **parte actora** a fs. 63/68 y manifestó: *“...Esta experta otorgó incapacidad por limitación funcional del 4to dedo, conforme el examen físico que resultó coincidente con los estudios complementarios presentados... Recuerdo al abogado que su cliente fue exhaustivamente revisado en consultorio y así determinada su limitación funcional, la que luego fuera ponderada obedeciendo al Decreto 659/96... Cabe recordarle al abogado que su propio reclamo es por mano izquierda, y, congruentemente, fue la mano izquierda la peritada... Debe observar el abogado que la incapacidad psicológica es evaluada por esta perito en base al examen psiquiátrico realizado en consultorio y presentado en el informe. Lo determinado por el informe psicodiagnóstico es solo una herramienta más, de ninguna manera vinculante, para la evaluación de esta experta, única encargada de ponderar incapacidad psicológica en etapa pericial. Se le hace saber al abogado que las conclusiones del informe pericial son obtenidas a partir de la totalidad de la documentación médica obrante en el Expte., junto con el examen semiológico en consultorio...”*

Asimismo, a fs. 69/72 contestó las impugnaciones formuladas por la **parte demandada**, en los siguientes términos: *“...Cabe si recordarle al abogado que las lesiones ponderadas son de carácter definitivo y permanente, por lo que el tiempo transcurrido entre el accidente y la lesión carece de relevancia. La cita a la*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

evaluación médica de la CM no importa cuestionamiento a mi informe por lo que no amerita respuesta de mi parte... El abogado hace referencia a una preexistencia, por lo que esta perito procedió a su búsqueda. Se constata "TRONCOSO CARLOS ALBERTO C/ PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIÓN DE REVISIÓN RES. COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL LEY 15057", bajo el Expte. N° MO-14639-2020, que tramitó en el Tribunal del Trabajo N° 3 de Morón. Surge proveído el 06/12/2021 por homologación del convenio conciliatorio suscripto por las partes el 23/11/2021. El perito médico Dr. Ricardo Albaca, consideró en evaluación virtual, incapacidad parcial, permanente y definitiva de 7% TO por limitación funcional de muñeca izquierda. Corresponde que esta experta aplique capacidad restante, tal como versa el Decreto 659/96: Preexistencia Expte 14639/2020 TT 3 de Morón 7% incapacidad. Capacidad restante 93 % Subtotal ajustado por C.R a 2% de 93% = 1,86%. FACTORES DE PONDERACIÓN Dificultad para la tarea (baja) 10 % Recalificación (no amerita) Edad 45 años 2%. Subtotal 12% de 1,86%: 0,22%. TOTAL DE INCAPACIDAD: 2,08%..."

Finalmente concluye: "...Por todo lo expuesto, **esta perito ajusta el cuadro de incapacidad final**. No corresponde incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 2,24% de la Total Obrera, sino **incapacidad de 2,08% TO**, según baremo de la Ley 24.557. Y **ratifica el resto de los puntos del informe pericial...**"

De esta manera, la especialista ha explicado de manera suficientemente clara los cuadros psíquico y físico que presentaba el actor al momento de practicarse la pericia encomendada, apoyándose



en los estudios complementarios y en la revisión y entrevista realizadas.

Por consiguiente, corresponde que valore de conformidad con el principio de la sana crítica (conf. art. 386 CPCCN) la eficacia probatoria del informe pericial reseñado, en cuanto a lo que se debate en estos autos.

En este contexto, cabe recordar que, para que el juzgador pueda apartarse de las conclusiones arribadas por el perito, debe tener razones muy fundadas, pues si bien las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, puesto que el informe comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho (conf. CNAT, Sala IV, 13/7/11, S.D. 95.579, “Yurquina, César Luis c/ Centro Médica SA y otro s/ despido”; íd., 12/8/11, S.D. 95.648, Ramírez, Javier c/ Asociart ART SA s/ accidente – ley especial”; CNCiv., Sala F, 29/06/1979, “C., R. P. y otra”, LL, 1979-D-274; íd., Sala F, 10/09/1982, “Rumbos Promotora S.A. c/ Tancal, S.A.”, LL, 1983-B-204; íd., Sala F, 26/08/1983, “Pettinato, Antonio P. c/ Mancuello, Oscar J. y otra”; íd., Sala F, 13/08/1982, “Villar, Daniel c/ Louge de Chihirigaren, Sara y otros, LL, 1982-D-249; íd., Sala D, 04/02/1999, “F.,J.D. y otro c/ Municipalidad





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

de Buenos Aires”, LL, 2000-A-435; íd., Sala K, 12/05/1997, “Rodríguez, Marta E. c/ Microómnibus Autopista S.A. Línea 56”, LL, 1997-E-1029, DJ, 1998-3-1085).

En el mismo orden de ideas se ha señalado que para apartarse de la valoración del perito médico, el juez debe encontrar sólidos argumentos, ya que se trata de un campo del saber ajeno al hombre de derecho, y aunque no son los peritos los que fijan la incapacidad, sino que ella es sugerida por el experto y determinada finalmente por el juzgador, basándose en las pruebas que surgen del expediente y las normas legales de aplicación, su informe resulta el fundamento adecuado para la determinación de la minusvalía que se ordena reparar (CNAT, Sala II, 30/8/96, “Protta, Fernando c/ Banco Hipotecario Nacional s/ accidente - acción civil”; Sala IV, 20/12/10, S.D. 95.073, “Berrios Flores, Jorge Luis c/ Stand Up SRL y otros s/ accidente – acción civil”).

En tal sentido, con respecto a las secuelas físicas halladas y el porcentaje de incapacidad atribuido a las mismas, por ser ello una cuestión propia y atinente a la especialidad de la experta designada en autos y por encontrar que la pericia médica se encuentra debidamente fundada y se ajusta a las disposiciones normativas aplicables –en particular, al Decreto 659/96 y sus modificatorias– tendré por válidas las conclusiones vertidas en el informe pericial.

En consecuencia, desestimaré las impugnaciones formuladas por las partes, por cuanto se exhiben como una mera discrepancia subjetiva con los criterios de la profesional interviniente, sin que se aporten argumentos de rigor que demuestren que la perito



ha incurrido en error o en un uso inadecuado de las técnicas propias de su profesión.

Por todo lo expuesto y haciendo uso de las facultades que me invisten, atento que el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N., **determino que el Sr. TRONCOSO presenta una incapacidad física del 2,08% de la T.O. (1,86% (CR) por secuelas físicas + 0,22% por factores de ponderación) por el accidente acontecido en agosto de 2023. Así lo decido.**

3°) Establecido como ha quedado el grado de incapacidad que detenta el accionante, se desprende la obligación del sistema de responder en consecuencia. En tal sentido, le corresponderá abonar a la parte demandada en estos autos la suma que por incapacidad laboral parcial y permanente dispone el régimen de la LRT (art. 14 inc. 2 a).

Para determinar la cuantía indemnizatoria estaré a las remuneraciones que surgen extraídas del sitio web de ARCA -incorporado al SGJ Lex-100 a fs. 58- teniendo en cuenta la aplicación del RIPTE, para el período considerado desde agosto de 2022 a julio de 2023 y los salarios actualizados, a saber:





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

Período	Fracción	Salario (\$)	Indice Ripte	Coefficiente	Salario act. (\$)
08/2022	(1,00000)	299.878,94	17.786,79	2,08852019	626.303,22
09/2022	(1,00000)	338.730,71	18.908,07	1,96466747	665.493,21
10/2022	(1,00000)	364.188,55	19.938,61	1,86312235	678.527,83
11/2022	(1,00000)	378.881,44	21.055,73	1,76427367	668.450,55
12/2022	(1,00000)	583.448,00	22.194,74	1,67373306	976.536,20
01/2023	(1,00000)	398.277,25	23.041,17	1,61224756	642.121,52
02/2023	(1,00000)	377.842,93	24.980,16	1,48710296	561.891,34
03/2023	(1,00000)	437.536,74	27.419,24	1,35481764	592.782,49
04/2023	(1,00000)	517.387,60	30.116,61	1,23347448	638.184,40
05/2023	(1,00000)	542.449,68	31.984,22	1,16144993	630.028,14
06/2023	(1,00000)	988.390,55	34.583,73	1,07414874	1.061.678,46
07/2023	(1,00000)	631.577,77	37.148,07	1,00000000	631.577,77
Períodos	12,00000				8.373.575,14

IBM (Ingreso base mensual): \$697.797,93 (\$8.373.575,14 / 12 períodos)

En tal sentido, **el IBM del actor asciende a la suma de \$697.797,93.-** Teniendo en cuenta lo anterior y a los efectos de fijar el **quantum reparatorio**, corresponde aplicar la fórmula $53 \times \text{IBM} \times 65/\text{edad} \times \text{porcentaje de incapacidad}$ ($\$697.797,93 \times 53 \times 2,08\% \times 65/45$).

El cálculo realizado de acuerdo a la fórmula mencionada arroja un total de \$1.111.142,41.- Corresponde diferir a condena la suma predeterminada, por cuanto se encuentra por encima del piso mínimo previsto por la Resolución SRT Nro. 12/23 que establece que, para los eventos ocurridos entre el 01/03/2023 y el 31/08/2023 el importe de la indemnización no puede ser inferior al que resulte de multiplicar la suma de \$11.589.837.- por el porcentaje de incapacidad ($\$241.068,60.- = \$11.589.837 \times 2,08\%$).

No encontrándose controvertido que el accidente que originó las secuelas incapacitantes se produjo mientras el Sr. TRONCOSO se encontraba prestando tareas para su empleadora,



procede también el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, de \$222.228,48.- ($\$1.111.142,41 \times 20\%$).

Por todo lo expuesto y que antecede, el actor es acreedor de una indemnización total de \$1.333.370,89.-

4º) En cuanto a los intereses, el artículo 12 de la Ley 24.557 (texto según la Ley 27.348) establece la aplicación de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina. Ello en el marco de un régimen legal que como regla general prohíbe la indexación y actualización de los créditos (conf. arts. 7 y 10 de la Ley 23.928). No puedo dejar de advertir en tal sentido que en atención al fenómeno inflacionario que afecta a nuestra economía desde hace varios años se han utilizado los intereses para enfrentar el ineludible proceso de desvalorización monetaria que sufren los créditos salariales e indemnizatorios, ello en atención a la prohibición de indexación monetaria que dimana de los artículo 7 y 10 de la Ley 23.928. Dicha prohibición fue establecida por el Congreso de la Nación en el marco de sus facultades constitucionales dentro del denominado Plan de Convertibilidad en el que se declaraba la convertibilidad del peso con el dólar estadounidense estableciendo la paridad a esos fines de un peso a un dólar estadounidense. Es decir que se establecía la prohibición de indexación y actualización monetaria en el marco de una economía desindexada y sin inflación por lo que la norma prohibitiva resultaba razonable y acorde con la situación económica existente durante dicho período (conf. art 28 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO. 59

Ahora bien, la situación económica actual dista enormemente de la que existía durante la vigencia del Plan de Convertibilidad, a punto tal que la mayoría de los artículos de la Ley 23.928 se encuentran derogados y solo mantienen vigencia en lo fundamental aquellas que prohíben la indexación y la actualización monetaria. Lo expuesto se ve especialmente agravado a la fecha del dictado de la presente sentencia por la fuerte inflación que azota a nuestra economía y por el hecho de que la tasa de interés que impone el artículo 12 de la Ley 24.557 (texto según la Ley 27.348) se encuentra por debajo de la tasa de inflación. En ese contexto la prohibición de indexación y de actualización monetaria en convivencia con una tasa de interés negativa como la que surge de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 24.557) importa en los hechos una licuación de los créditos que se discuten en autos de claro carácter alimentario.

En definitiva, la abstención del suscripto de actualizar los montos de condena aplicando una tasa de interés negativa importaría violentar el mandato constitucional de afianzar la Justicia que impone al Estado Argentino en general y a los jueces en particular el propio Preámbulo de nuestra Ley Fundamental.

Así las cosas, en el especialísimo contexto actual, la prohibición de indexar y de actualizar los créditos alimentarios de autos resulta en definitiva violatorio del artículo 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL por cuanto en definitiva pulveriza el derecho de propiedad del actor al permitir licuar -por efecto del mero paso del tiempo- los montos de condena generando un injusto e indebido enriquecimiento sin causa del deudor demandado.



Estamos en presencia entonces de un claro ejemplo de lo que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha denominado como *“inconstitucionalidad sobreviniente”*, es decir de un supuesto en el cual los artículos prohibitivos de la indexación y de la actualización monetaria fueron ab initio razonables y compatibles con la disposiciones constitucionales pero que –posteriormente– por circunstancias sobrevinientes con posterioridad se han tornado incompatibles con las normas constitucionales.

En consonancia con lo expuesto la CORTE SUPREMA DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN ha establecido que *“corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que – aunque no ostensiblemente incorrectas en su inicio- devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantenga coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución Nacional”* (CSJN Fallos: 316:3104, “Vega, Humberto Atilio c/Consortio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro s/Accidente – Ley 9688” de fecha 16 de diciembre de 1993).

Por las razones expuestas y teniendo en consideración que la actualización monetaria *“no hace a la deuda más onerosa en su origen”* sino que *“sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento”* y que en las condiciones actuales *“la actualización de créditos salariales responde a un claro imperativo de justicia, cual es el de eliminar los efectos*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

perniciosos que la demora en percibirlos ocasiona a los trabajadores, atento a que las prestaciones de esa especie tienen contenido alimentario y las indemnizaciones laborales se devengan, generalmente en situaciones de emergencia para el trabajador" (CSJN, sent. 3/5/1979, "VALDEZ, JULIO HECTOR C/ CINTIONI, ALBERTO DANIEL, Fallos 301:319) corresponde que **declare sin más la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y del artículo 12 de la Ley 24.557** (texto según la Ley 27.348) en cuanto impone la tasa activa del Banco Nación. Así lo decido.

Por lo dicho establezco que el importe diferido a condena , deberá ser actualizado desde la fecha del siniestro **(31/08/2023)** y hasta el efectivo pago, en base a la variación del **índice de precios al consumidor - nivel general- elaborado por el I.N.D.E.C. -** salvo para los períodos en los que no se encuentre publicado dicho índice en los cuales se aplicará la variación del índice de precios al consumidor elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA)-, **con más intereses a una tasa del 6% anual por igual período.**

La forma en que se resuelve el tema de los intereses torna **inaplicable la regla establecida en el artículo 770, inciso b del Código Civil y Comercial**, norma elaborada en el marco de un sistema de intereses distinto al que en definitiva aplicaré en estos autos.

5°) Las costas serán impuestas a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

Los honorarios de los profesionales intervinientes serán fijados en base a lo dispuesto en la Ley 27.423. Digo ello por cuanto



el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 157/18 en cuanto dispone la no aplicación de dicha norma legal a *“los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los artículos 1 y 2 de la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo Nro. 27.348, sustanciados por organismos administrativos y/o judiciales que se encuentran en la órbita de la competencia nacional o federal”* (conf. art. 2, Decreto 157/18) resulta inconstitucional. Digo ello, por cuanto no se advierte la existencia de emergencia alguna sino simplemente la discrepancia del titular del Poder Ejecutivo Nacional con el contenido de la Ley 27.423, lo que no lo habilita a derogar y/o modificar dicha norma legal sin violar el principio de división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano de gobierno (conf. art. 1, CONSTITUCIÓN NACIONAL). Tampoco resulta admisible lo sostenido en el referido decreto acerca de supuestas dudas interpretativas derivadas de la sanción y promulgación de la Ley 27.423 por cuanto en todo caso las mismas deber disipadas y resueltas por los jueces y no por el Presidente de la Nación.

Así las cosas y ejerciendo el control de constitucionalidad al que me veo obligado a los fines de resguardar la supremacía de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL corresponde que **declare de oficio la inconstitucionalidad del Decreto 157/18 (art. 2)**, consignando que dicha atribución de declarar la inconstitucionalidad de oficio de una norma infra constitucional se encuentra avalada por la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN a partir del caso “MILL DE PEREYRA, RITA AURORA c/ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” (Fallos 324:3219) Y





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL
TRABAJO NRO. 59

“RODRIGUEZ PEREIRA, JORGE LUIS Y OTRA C/EJERCITO ARGENTINO S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Fallos 335:233). Así lo decido

Por lo expuesto, **declaro la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto 157/18**, lo que así se decide.

Por todo ello, disposiciones legales citadas y demás consideraciones vertidas, **FALLO:**

1) Haciendo lugar al recurso conforme a la ley 27.348 incoado por **CARLOS ALBERTO TRONCOSO** contra lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional Nro. 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2) Condenando a **PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.** a abonar a aquél, dentro del quinto día de notificada la liquidación prevista en el art. 132 L.O., la suma de **\$1.333.370,89.-** (PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS), más la actualización e intereses previstos en el considerando respectivo.

3) Imponiendo las costas a **PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.** (art. 68 CPCCN). A tal efecto, con mérito en la extensión e importancia de las tareas desplegadas por la representación y patrocinio letrado de la actora -por toda su actuación-, por la de la demandada -por toda su actuación- y las del perito médico se regulan sus honorarios en 21,97 UMA (\$1.772.188,08.-), 19,40 UMA (\$1.564.881,60.-) y 6 UMA (\$483.984.-) respectivamente. Se deja constancia que la precedente regulación incluye la actuación llevada adelante en sede



administrativa y que no incluye el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. **REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE; Y OPORTUNAMENTE, PREVIA CITACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARCHÍVESE.**

CARLOS JAVIER NAGATA
JUEZ NACIONAL

